

**TRABAJO FINAL DE GRADO EN TRADUCCIÓN E  
INTERPRETACIÓN**

*TREBALL FINAL DE GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ*

*Departament de Traducció i Comunicació*

**TÍTULO / TÍTOL**

**La figura del traductor-intérprete jurado en España y  
en el Reino Unido:**

**Un estudio contrastivo**

**Autor/a:** Tetyana Annyuk

**Tutor/a:** María del Pilar Ordóñez López

**Fecha de lectura/ Data de lectura:** junio 2015



## **Resumen/ Resum:**

La figura del intérprete jurado surge con motivo de favorecer la comunicación entre distintas civilizaciones, así como para hacer frente a la evidente falta de conocimiento de las lenguas, tan imprescindibles en las relaciones comerciales o diplomáticas. Este mediador lingüístico evolucionará con el paso del tiempo dando lugar a una figura profesional acreditada, conocida como traductor-intérprete jurado. Así pues, nuestra investigación parte de la necesidad de explorar la figura del traductor-intérprete jurado en España y en el Reino Unido, con el fin de valorar el grado de paralelismo existente entre ellas. Para ello, analizamos y comparamos los aspectos más importantes relativos a esta figura en España y en el Reino Unido, atendiendo a cuestiones como la definición del concepto de la traducción jurada, la evolución histórica de la figura del traductor-intérprete jurado, las vías de acceso a la profesión, la obtención de la acreditación, las competencias otorgadas y el ámbito de actuación. Tras analizar las cuestiones mencionadas anteriormente, concluimos el trabajo mediante una reflexión de los resultados obtenidos, entre los que cabe resaltar, por ejemplo, el hecho de que en Gran Bretaña exista la traducción jurada, pero no el traductor jurado como tal. A diferencia de España, donde es necesario someterse a un examen organizado por el ministerio con el fin de obtener el nombramiento del traductor-intérprete jurado que habilita para la realización de traducciones y posteriormente su certificación, en el Reino Unido cualquier traductor puede dar fe pública de una traducción. Los resultados de este trabajo de investigación nos permiten, por tanto, comprobar que no existe, y probablemente nunca existirá, un paralelismo total entre ambas

## **Palabras clave/ Paraules clau: (5)**

Traductor-intérprete jurado, sworn translator, traducción jurada, certificación de traducciones, vías de acceso a la profesión

## Índice

1. Introducción.....	4
2. Metodología.....	6
3. Desarrollo del trabajo .....	7
3.1. Concepto de traducción jurada en España y en el Reino Unido .....	7
3.1.1. Documentos que requieren una traducción jurada .....	8
3.2. Origen y la evolución histórica de la figura del traductor-intérprete jurado en España.....	10
3.3. Origen y la evolución histórica de la figura de traductor-intérprete jurado en el Reino Unido.....	14
3.4. Situación actual en España .....	16
3.4.1. Vías de acceso a la profesión del traductor-intérprete jurado en España.....	18
3.4.1.1. Exámenes.....	19
3.4.1.2. Reconocimiento de cualificaciones profesionales.....	20
3.4.1.3. Exención de examen por titulación universitaria .....	21
3.5. Situación actual en el Reino Unido.....	23
3.5.1. Vías de acceso a la profesión del traductor-intérprete Jurado en Reino Unido .....	24
3.5.1.1. <i>Diploma in Translation</i> (DipTrans).....	24
3.5.1.2. <i>Diploma in Public Service Interpreting</i> (DPSI) .....	25
4. Conclusiones.....	27
4.1. Resultados obtenidos .....	27
4.2. Relación del trabajo con los conocimientos adquiridos en la carrera e intereses futuros .....	29
5. Bibliografía.....	30
5.1. Artículos y publicaciones disponibles en internet .....	30
5.2. Materiales legales y otros recursos en línea.....	31
6. Anexos.....	34
6.1. Modelos de examen para obtener el nombramiento de traductor-intérprete jurado en España .....	34
6.2. Modelos de examen para obtener el <i>Diploma in Translation</i> en el Reino Unido	39
6.3. Modelos de examen para obtener el <i>Diploma in Public Service Interpreting</i> en el Reino Unido .....	42

## **1. Introducción**

En el presente trabajo de investigación nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿cómo es la figura del traductor-intérprete jurado en España y en el Reino Unido?, ¿encontramos diferencias y similitudes entre estas figuras?, ¿existe una equivalencia total entre ambas? En relación con estas hipótesis, describimos, en primer lugar, la justificación del estudio. A continuación, presentamos los objetivos que nos planteamos para este trabajo, y, por último, procedemos a la contextualización del objeto de estudio.

En la actualidad la figura del traductor-intérprete jurado en España es el fruto de una larga historia que ha evolucionado a través de diversas normativas dictadas por la legislación española para determinar el acceso a dicho nombramiento. Mediante nuestro estudio pretendemos aportar una visión objetiva de los aspectos más importantes en lo que respecta a la figura del traductor-intérprete jurado en España y en el Reino Unido. El objetivo general del presente trabajo consiste en analizar a través de un enfoque comparativo las vías de acceso a la traducción jurada, así como la definición, competencias y ámbito de actuación del traductor-intérprete jurado en ambos países, con el fin de determinar el grado de paralelismo existente entre ellas.

A continuación, desglosamos el objetivo general en una serie de objetivos específicos:

1. Analizar los antecedentes históricos de la figura del traductor-intérprete jurado en España y en el Reino Unido.
2. Repasar la situación legislativa actual de la figura del traductor jurado en lo que respecta a la obtención de la acreditación como traductor-intérprete jurado en España y en el Reino Unido.
3. Revisar las vías de acceso a la profesión en ambos países.
4. Valorar el reconocimiento profesional de la figura del traductor jurado en España y en el Reino Unido.
5. Llevar a cabo una comparación de esta figura en ambos países, objeto de nuestro estudio.

Estos objetivos nos ayudan a completar la información proporcionada por otros autores que han llevado a cabo investigaciones similares, y ofrecer, de este modo, un estudio más actualizado y novedoso. En cuanto a los antecedentes y la contextualización del objeto de estudio, nuestro trabajo se apoya en gran medida en la información

extraída de las normas publicadas en el BOE y la tesis doctoral de Francisco Vigier sobre el *Nombramiento de Traductores-Intérpretes Jurados de Inglés mediante acreditación académica: descripción de la formación específica y del grado de satisfacción de los egresados* (2010), quien aporta numerosos datos acerca de la situación legal de traductores-intérpretes jurados y posibles vías de acceso a la profesión en España y en el Reino Unido. También hemos consultado las obras de Ingrid Cáceres Würsig y Luis Pérez González (2003), y Peñarroja (2004), para documentarnos sobre los antecedentes históricos de intérpretes jurados, y para introducir los datos más relevantes de la evolución histórica de la traducción jurada a través de las diversas normas dictadas por la legislación española. En cuanto a la bibliografía disponible en el ámbito británico, hemos encontrado muy pocas publicaciones sobre la traducción jurada en el Reino Unido. Por ello, para realizar nuestro trabajo, nos hemos basado en los datos recopilados de las páginas oficiales de las instituciones británicas que aparecen a lo largo de este estudio y, como hemos mencionado anteriormente, en la tesis de Francisco Vigier (2010).

## **2. Metodología**

En el presente apartado exponemos de manera sintetizada la metodología aplicada. Hemos dividido nuestro trabajo en las siguientes fases, basándonos en el modelo propuesto por Anabel Borja, Isabel García Izquierdo y Vicent Montalt (2009) disponible en la página oficial de GENTT:

1. Fase conceptual: en esta fase introducimos el objeto de nuestro estudio, así como los objetivos planteados para el mismo. Presentamos un estudio detallado de la figura del traductor jurado basado en el marco legal y en las condiciones de acceso al ejercicio profesional.
2. Fase empírica: en esta fase hemos empleado el método cuantitativo que consiste en la recopilación de los datos y su posterior análisis. Así pues, hemos estudiado y analizado las obras de investigación de los autores mencionados anteriormente, para extraer todos los datos necesarios con el fin de conocer la evolución de la figura del traductor-intérprete jurado. A continuación, hemos examinado las normativas más recientes y, por último, las hemos comparado con las anteriores para observar el cambio que se ha producido en cuanto a las vías de acceso a la profesión.
3. Fase interpretativa: en esta fase procedemos al análisis de los resultados obtenidos. Asimismo, sintetizamos los datos recopilados sobre la figura del traductor jurado en lo que respecta al marco legal, es decir, las competencias, situaciones en las que se requiere una traducción o interpretación jurada, y las vías de acceso a la profesión en España y en el Reino Unido, y posteriormente los comparamos para poder proporcionar una visión objetiva y contrastiva de la situación actual del traductor jurado en ambos países.

### 3. Desarrollo del trabajo

#### 3.1. Concepto de traducción jurada en España y en el Reino Unido

En el presente apartado definimos términos como *traducción jurada* e *interpretación jurada*, y explicamos en qué se diferencian de la *traducción jurídica* y la *interpretación judicial*, mencionando asimismo los documentos más representativos de la traducción jurada.

Anabel Borja propone una definición para la traducción jurada: “la versión de un texto de una lengua a otra en la que un ‘fedatario público’ —traductor jurado— da fe de que corresponde al original” (Borja, 2012:173).

A partir de esta definición comprobamos la importancia de la función que desempeña el traductor jurado (actualmente denominado Traductor-Intérprete Jurado (TIJ) en España), pues mediante su firma y sello, da fe pública de la traducción. Sin embargo, no debemos confundir la traducción jurada con la traducción jurídica que, como explica Anabel Borja en su artículo sobre la *Aproximación traductológica a los textos médico-jurídicos* (2012), hace referencia a “un tipo de traducción especializada en el ámbito del derecho” (Borja, 2012:173). La autora apunta que el “traductor jurídico se dedica a traducir textos provenientes de los distintos campos del derecho, como derecho administrativo, derecho penal, etc.”, mientras que la “traducción jurada no está circunscrita a priori a un campo de especialidad determinado” (Borja, 2012:173). Por lo tanto, el traductor jurado se dedica a traducir documentos procedentes de diferentes campos temáticos.

Por otro lado, encontramos la definición de interpretación jurada: “la actividad de interpretar realizada por un TIJ en su condición como tal” (Vigier 2010:17). No obstante, no todas las interpretaciones son realizadas por un TIJ. Así, según el artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial “el juez o Tribunal podrá habilitar como interprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada”. Tampoco debemos relacionar dicha actividad con la interpretación judicial: “mediación lingüística oral que se produce en el contexto de una causa judicial y para la que no siempre se cuenta con los servicios de un TIJ” (Vigier 2010:17).

En lo que se refiere a la traducción jurada en el Reino Unido, dicha actividad no está tan bien definida como en otros países, puesto que en el Reino Unido, tal y como

expone Francisco Vigier (2010) en su tesis, “cualquier traductor puede certificar que la traducción que ha realizado es fiel y verdadera con respecto al original, añadiendo un sello y una firma a dicha certificación” (Vigier, 2010:95). A pesar de la evidente falta de regulación por el gobierno del Reino Unido, las traducciones oficiales se siguen llevando a cabo, puesto que, al igual que en otros países, constituyen una actividad imprescindible en el sector de la traducción. De este modo, diferenciamos dos tipos de traducción: *self-certified translation*<sup>1</sup> y *sworn translation*. Vigier (2010) explica que la *self-certified translation* se realiza por los propios traductores, mientras que la *sworn translation*<sup>2</sup> o *traducción notariada* es realizada por un notario o legalizada ante uno.

Los documentos que se traducen al inglés y que deben presentarse ante autoridades inglesas solo requieren que un traductor comparezca ante un notario o un *Commissioner for oaths*<sup>3</sup> y que manifieste a su leal saber y entender la traducción es traducción fiel exacta de su original (Phillips, 1999: s.p.).

Sin embargo, una traducción notariada puede resultar más costosa, pues, además de pagar el coste de la traducción, el cliente tendrá que abonar los honorarios del fedatario que la certifique. Asimismo, el sistema jurídico inglés, que Vigier (2010) considera “mucho menos notarial y burocrático”, a veces ni siquiera requiere de este tipo de traducción: basta con una simple fórmula de certificación y la firma del traductor.

### **3.1.1. Documentos que requieren una traducción jurada**

Como señala Vigier (2010) no se sabe con certeza qué documentos pueden requerir una traducción y su consiguiente certificación por traductores jurados. A continuación, repasamos la clasificación de documentos, elaborada por Roberto Mayoral (1999: s.p), en los que se da con frecuencia la traducción jurada:

---

<sup>1</sup> Se podría afirmar que la *self-certified translation* que Vigier menciona en su tesis doctoral (2010) se corresponde a la *certified translation*, puesto que según las páginas oficiales de las instituciones británicas, la *certified translation* es realizada y certificada por un traductor o agencia. (Institute of Translation and Interpreting)

<sup>2</sup> En la actualidad, el término *sworn translation* se encuentra en desuso y se utiliza más *notarized translation* para referirse a una traducción notariada.

<sup>3</sup> A solicitor authorized to administer an oath to a person making an affidavit (Oxford English dictionary, 2015)



- Elementos documentados: nacimiento, matrimonio, estudios académicos, defunción, testamento, actividades delictivas y otros hechos con valor jurídico o administrativo.
- Elementos documentales: carta, informe, impreso de certificación en blanco, impreso de certificación cumplimentado, certificado validado, etc.
- Elementos validativos: diligencias de certificación a diferentes niveles correspondientes a momentos diferentes del proceso (del encargado del registro, del notario, etc.)

Por otra parte, Ortega Arjonilla (1997:76, citado en Vigier, 2010:58) nos proporciona una serie de documentos que requieren la traducción jurada, basándose en los siguientes ámbitos del Derecho:

- Derecho Penal y procesal: sentencias, citaciones judiciales, etc.
- Derecho Civil: poderes, testamentos, etc.
- Derecho administrativo: contratos, escrituras, convenios, etc.

### **3.2. Origen y la evolución histórica de la figura del traductor-intérprete jurado en España**

En el presente apartado, en base a las investigaciones de Ingrid Cáceres Würsig y Luis Pérez González (2003) y Josep Peñarroja (2004), se realizará una introducción a la evolución histórica del traductor-intérprete jurado en España a través de diversas normativas que han ido dando forma a esta figura.

Como indican estos autores, el origen de la figura del traductor-intérprete jurado en España se remonta a 1527, año del que data la fundación de la Secretaria de Interpretación de Lenguas (actualmente denominada *Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación* (OIL)). Dos años más tarde, en 1529, con motivo de la pluralidad de lenguas habladas en el continente americano, las autoridades españolas se vieron obligadas a introducir las primeras normas con objeto de regular la situación de los intérpretes en América, lo que dio pie ocho años más tarde, en 1537, a la publicación de una nueva norma con la finalidad de evitar los posibles errores durante la interpretación:

Mandamos que cuando alguno de los presidentes y oidores de nuestras audiencias ú otros cualesquier juez enviare á llamar á indio ó indios, que no sepan la lengua castellana,(...) traigan consigo un cristiano amigo suyo que esté presente, para que vea si lo que ellos dicen á lo que se les pregunte y pide, es lo mismo que declaran los naguallatos e intérpretes (Peñarroja, 2004: s.p.).

En 1563 Felipe II dictó una serie de nuevas ordenanzas en las cuales encontramos a *los intérpretes que juran* (Peñarroja, 2004). Dichas ordenanzas insistían en la importancia del oficio del intérprete. Veinte años más tarde, en 1583, se vuelve a incidir en la tarea y la cualificación del intérprete:

Mandamos que los presidentes y oidores de nuestras audiencias cuiden mucho de que los intérpretes tengan las partes, calidades y suficiencia que tanto importan [...] (Peñarroja, 2004: s.p.).

La última ordenanza emitida durante el reinado de Felipe IV, en 1630, y de aplicación en todo el imperio colonial, exige a los intérpretes a realizar un examen, además de la aprobación que se venía haciendo por la comunidad.

Mandamos que los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores de las ciudades no hagan los nombramientos de los intérpretes solos, sino que preceda examen, voto y aprobación de todo el cabildo ó comunidad de los indios [...] (Peñarroja, 2004: s.p.).

Cabe destacar también que las traducciones de carácter oficial, consideradas como una tarea exclusiva de la Secretaria de la Interpretación, fueron realizadas por otros traductores. Sin embargo, la Real Orden de 24 de septiembre de 1841 declaró ilegales todas aquellas traducciones que no se produjesen por la Oficina de Interpretación de Lenguas. Esta norma, cuyo objetivo era proteger los derechos de la Secretaria, originó muchas quejas por parte de los tribunales debido a una evidente paralización en el tráfico comercial y la administración de justicia (Peñarroja, 2010). Como consecuencia, se dictó en 1843 una nueva norma que declaraba que la normativa anterior solo tenía efecto en los tribunales propios de la Corte, permitiendo que los traductores en las provincias restantes pudiesen seguir desempeñando su labor. Sin embargo, la nueva orden acarreó efectos adversos en la economía de la Secretaría, puesto que la mayor parte de sus ingresos provenía del servicio de traducción (Cáceres y Pérez, 2003). Así, a partir del año 1851, empiezan a examinarse en la Secretaría de Interpretación de Lenguas personas que tras la aprobación del examen quedaban autorizadas para traducir documentos oficiales “con derecho a cobrar un arancel por página traducida y que reciben el título de intérpretes jurado” (Cáceres y Pérez, 2003:4). No obstante, a pesar de una nueva orden emitida por el Ministerio de Estado el 15 de agosto de 1853 con el propósito de “habilitar a personas entendidas en el idioma de que se trate, dándose al efecto facultad a las autoridades que ejercen funciones judiciales para nombrar provisionalmente en calidad de traductores periciales” (Peñarroja, 2004:s.p.), los traductores oficiales no eran los únicos que ejercían en calidad de fedatarios de idiomas. Diversos convenios internacionales establecidos entre el Estado español y países como Francia, Alemania, Bélgica, etc. proporcionaban a las traducciones realizadas por las autoridades consulares de dichos países el mismo grado de oficialidad que a las traducciones realizadas por los traductores e intérpretes jurados. Así, por ejemplo, el convenio suscrito entre España y Francia el día 7 de enero de 1862 autorizaba a los cónsules galos a “traducir los documentos emanados de su país” (Peñarroja, 2004:s.p.).

Esta evolución histórica planteada hasta finales del siglo XIX, nos sitúa ante una etapa inmersa en la complejidad, donde subyacen numerosos conflictos legales entre los

distintos profesionales, perjudicando así a la traducción jurada como entidad propia. No obstante, a través de diversas normativas, podemos apreciar cómo muchos defensores de la profesión consiguieron cierto progreso en la regulación de la traducción jurada como oficio. Así, en 1870 se promulga una nueva ley que recoge los principios básicos de toda la Legislación posterior sobre la materia:

Art. 80. El nombramiento de los intérpretes jurados que sean necesarios en las provincias, continuará expidiéndose como hasta aquí por el Ministerio de Estado.

Art. 81. Para obtener dicho nombramiento, el que lo pretenda deberá dirigir por sí, o por medio del Gobernador civil de la respectiva provincia, una solicitud acompañada de la partida de nacimiento, por donde pruebe haber cumplido la mayor edad y ser español. [...] Siéndole favorable el informe de ambos extremos, se someterá a un examen en la Interpretación de Lenguas en Madrid, a fin de probar su capacidad y su conocimiento de los idiomas para cuya versión al castellano pida ser autorizado.

Art. 82. Obtenido el nombramiento en vista de buena nota en el examen, prestará ante el Gobernador respectivo el debido juramento de ejercer fielmente y en conciencia su profesión, y no podrá cobrar por las traducciones que expida otros derechos que los señalados en la tarifa vigente en la Interpretación central [...] (Peñarroja, 2004: s.p.).

A continuación procederemos a la descripción de las leyes promulgadas con relación a la traducción jurada en España durante el siglo XX, basándonos en los trabajos de Francisco Vigier Moreno (2009), Josep Peñarroja Fa (2004) e Ingrid Cáceres Würsig y Luis Pérez González (2003).

1977	Se publica un nuevo Real Decreto vigente hasta 1996, según el cual la Oficina de Interpretación de Lenguas (OIL) no realizará traducciones a particulares y adquirirá la máxima autoridad sobre la traducción e interpretación en la Administración del Estado y, por consiguiente, organizará y calificará los exámenes de intérprete jurado. En lo que respecta a exámenes, éstos se celebrarán dos veces al año y podrán presentarse todas las personas mayores de edad que posean el título de Bachiller Superior. Las traducciones solicitadas por particulares se realizarán a cargo de los IIJJ quienes podrán establecer sus propias tarifas
------	--

	por sus servicios.
1986	El RD 889/1977 permite a los ciudadanos de países miembros de las Comunidades Europeas participar en los exámenes de IIJJ que se llevarán a cabo una vez al año.
1996	El RD 2555/1997 vuelve a ser objeto de modificación a fin de atribuir el carácter oficial no solo a las traducciones realizadas al español, sino también a la lengua de habilitación. El RD establece nuevos requisitos de acceso para los licenciados en Traducción e Interpretación, quienes podrán solicitar el nombramiento de Intérprete Jurado mediante la acreditación académica de determinadas asignaturas.
2002	La Orden AEX 1971/2002 perfecciona el RD 2555/1997 sobre la exención del examen para los licenciados en Traducción e Interpretación, quienes serán nombrados mediante la acreditación académica. Dicha vía de acceso se aplicará hasta el 30 de septiembre de 2015.

### **3.3. Origen y la evolución histórica de la figura de traductor-intérprete jurado en el Reino Unido**

En este apartado analizamos la evolución de la figura del traductor-intérprete jurado en el Reino Unido apoyándonos en la investigación de Francisco Vigier Moreno (2010). Si bien la traducción jurada en España cuenta con una larga historia, y ha ido evolucionando a través de una serie de normativas a fin de regular la profesión del traductor-intérprete jurado, este ámbito en el Reino Unido ha recibido poco interés.

This is an activity which has not been previously regulated; it is an occupational area that has not had professional recognition; and it is a profession which has not had internal systems of support through examination, regulation by professional body or public standing (Connell, 2002:148, citado en Vigier, 2010:93)

Pese a nuestros esfuerzos por encontrar la información sobre la evolución histórica de la traducción jurada en el Reino Unido, hemos logrado muy pocos datos al respecto, por lo cual comentamos los hechos más destacables que hemos obtenido del trabajo de investigación de Vigier (2010) y la información proporcionada por las paginas oficiales de las instituciones que mencionamos a continuación.

Por un lado, encontramos el Chartered Institute of Linguists (CIOL): “institución británica que organiza exámenes para la obtención de diplomas como traductores” (Ordoñez, 2009:10) y, por otro, el Registro Nacional de Intérpretes para los Servicios Públicos (NRPSI), cuyo objetivo es “estar al servicio de las organizaciones y agencias encargadas de proporcionar servicios públicos en el Reino Unido, para que puedan encontrar intérpretes profesionales cualificados de calidad garantizada” (Vigier, 2010:98). Cabe destacar también la reciente creación de la titulación específica en servicio de la interpretación pública, el *Diploma in Public Service Interpreting* (DPSI) ofrecida por el CIOL, con especialización tanto en derecho inglés como en escocés, que una vez obtenido permite acceder al NRPSI.

El Chartered Institute of Linguists fue fundado en 1910 por William Lacón Threlford para hacer frente a la evidente falta de conocimiento en lenguas modernas, sobre todo entre los comerciantes que participaban en el negocio exterior. Gracias a sus vínculos comerciales, Threlford consiguió varios patrocinadores para cumplir con el objetivo establecido por la academia. Más tarde, en 1989, el CIOL creó DipTrans, *Diploma in*

*Translation*, “como parámetro de cualificación profesional de traductores y como referencia para posibles clientes” (Vigier, 2010:101).

A principios de 1990 se puso en marcha un nuevo proyecto apoyado por el CIOL y financiado por la Nuffield Foundation que se materializó en 1994, año en que se instauró el NRPSI. Desde su origen, el registro estaba administrado por el CIOL; sin embargo, en 2011, el NRPSI se independizó del CIOL y hoy en día constituye una organización independiente sin ánimo de lucro. Además, con la celebración del *National Agreement on Arrangements for the Use of Interpreters, Translators, and Language Service Professionals in Investigations and Proceedings within the Criminal Justice System* en el año 2002 y su posterior revisión en 2007, el número de usuarios del registro ha aumentado considerablemente, puesto que, según el convenio, los intérpretes que deseen trabajar en la justicia penal han de estar inscritos en el NRPSI (Vigier, 2010). Por lo tanto, se podría considerar que la inscripción en el NRPSI otorga al traductor el estatus de un profesional acreditado.

### 3.4. Situación actual en España

En este apartado analizamos la situación actual de la traducción jurada en lo que respecta la oficialidad de los documentos en España, la fórmula de certificación que emplea un traductor jurado, las situaciones en las que se requiere el servicio de un intérprete jurado y la forma de establecer contacto con un traductor-intérprete jurado.

Como hemos descrito en el primer apartado, la traducción jurada hace referencia a una traducción oficial realizada por un TIJ.

Por TIJ entendemos a la persona autorizada por el MAEC para realizar traducciones e interpretaciones fieles y exactas tanto al español como a la lengua de su nombramiento (Vigier, 2010:50)

De este modo, el traductor, mediante su firma y sello que certifican la legitimidad y exactitud de la traducción, le otorga a la traducción dicho carácter oficial, convirtiéndola en una traducción jurada.

Con el fin de facilitar la información acerca de traductores-intérpretes jurados en España, la OIL elabora periódicamente un listado de todos los traductores que han sido nombrados por el MAEC. Así, los ciudadanos que necesiten una traducción jurada podrán dirigirse a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a la pestaña *Servicios al ciudadano*, donde encontrarán dicha lista con los datos de contacto de los traductores jurados y el idioma o idiomas para los que han sido habilitados.

En lo que se refiere a los documentos que requieren una traducción jurada, la normativa no dicta nada al respecto. Sin embargo, sabemos que las autoridades suelen exigir este tipo de traducción, sobre todo cuando se pretende acreditar diversos hechos jurídicos. Para ver qué documentos suelen ser objeto de traducción jurada a la traducción jurada, véase el apartado 3.1.1.

Aunque nos pueda parecer que la profesión de TIJ se encuentra claramente definida a través de las normas que se han ido dictando a lo largo de los años, la situación actual es muy diferente.

Artículo 1. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores-Intérpretes Jurados tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo



soliciten las autoridades competentes (RD 2002/2009, de 23 de diciembre).

En este artículo comprobamos que la normativa tan solo se limita a otorgar el carácter oficial a la traducción realizada por el TIJ y contempla la posibilidad de que sea revisada por la OIL, cuando así lo requieren las autoridades competentes. Tras analizar la evolución histórica de la figura del traductor-intérprete jurado en España es evidente que la legislación, desde su origen, se ha centrado sobre todo en regular el acceso a la profesión. Aparte de esto, se podría considerar que la traducción jurada experimenta cierta indefinición, puesto que “la legislación no ha establecido todavía los derechos y deberes de estos profesionales, no ha delimitado claramente sus competencias y funciones y no determina las pautas que han de regir su ejercicio profesional” (Vigier, 2010: s.p.).

Según la Orden de 6 de noviembre de 2014, la fórmula empleada en el proceso de certificación es la siguiente:

Don/Doña.....(nombre y apellidos), Traductor/a-Intérprete Jurado/a de..... (idioma) nombrado/a por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al ..... (lengua de destino) de un documento redactado en .....(lengua de origen). En ..... (lugar), a .....(fecha) Firma.
---

En lo que respecta al sello del traductor jurado, la orden establece, a continuación, los datos que han de figurar en el mismo:

- Nombre y apellidos del Traductor/a-Intérprete Jurado/a.
- Idioma o idiomas para cuya traducción e interpretación ha sido habilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
- Número de Traductor/a-Intérprete Jurado/a.

En cuanto a la interpretación jurada, el panorama en este ámbito parece todavía menos regulado. Como apunta Vigier (2010), la legislación vigente no dicta nada con respecto a la traducción oral, es decir, no existe ninguna norma que establezca cómo se ha de certificar una interpretación jurada.

[...] basta con prestar “juramento ante el tribunal de traducción fiel y exacta” y firmar dicho documento con el nombre y número del DNI (Vigier, 2010:59).

En la actualidad, como bien explica Vigier (2010), la traducción de textos escritos abarca la mayor parte de la actividad de un TIJ, de modo que se ha producido un notable distanciamiento en el ámbito de la interpretación. Como hemos comentado anteriormente, no existe ninguna regulación que pueda guiar a los intérpretes, y como consecuencia de ello no se puede garantizar la calidad de la interpretación llevada a cabo por un TIJ.

Con relación a las situaciones en las que se requiere el servicio de un intérprete jurado, éstas suelen darse sobre todo cuando una persona envuelta en un proceso judicial desconoce la lengua del país en que se encuentra. Así, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y su reciente modificación de 28 de abril de 2015:

Artículo 440. Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se nombrará un intérprete, que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.

Artículo 441. El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa.

Resulta sumamente inquietante el hecho de que cualquier persona sin formación en el campo de la interpretación pueda realizar una traducción de carácter oral; esta situación permite contratar a traductores e intérpretes sin cualificación, sin ninguna garantía de calidad, provocando a menudo situaciones indeseables.

### **3.4.1. Vías de acceso a la profesión del traductor-intérprete jurado en España**

En el presente apartado revisamos la legislación vigente que regula el acceso a la profesión del traductor-intérprete jurado, atendiendo a la convocatoria más actual para apreciar los cambios que se han producido en la última convocatoria en lo que respecta al contenido de las pruebas y procedimientos necesarios que han de llevar a cabo los solicitantes. Asimismo, describimos las posibles vías de acceso para obtener el nombramiento del TIJ por el MAEC.

Diferenciamos tres vías de acceso a la profesión del traductor-intérprete jurado: en primer lugar, se puede obtener el nombramiento de TIJ a través de los exámenes convocados por el MAEC; en segundo lugar, mediante el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo; y, en tercer lugar, los licenciados en Traducción e Interpretación pueden conseguir la habilitación con exención de examen.

#### **3.4.1.1. Exámenes**

Recuperamos en este apartado la última convocatoria de exámenes: en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto y en la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, se convocan exámenes para el nombramiento de Traductor-Intérprete Jurado que tendrán lugar a partir del 16 de febrero de 2015.

Los candidatos que deseen participar en los exámenes han de reunir los siguientes requisitos, además de abonar la tasa cuyo importe para la presente convocatoria es de 37,15 euros:

- a) Ser mayor de edad.
- b) Poseer la nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
- c) Poseer un título español de Graduado o Licenciado, o un título extranjero debidamente homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Con respecto a las anteriores convocatorias, la nueva convocatoria introduce modificaciones en el contenido del examen. Los solicitantes tendrán que realizar un ejercicio más, comparado con la convocatoria anterior que incluía solo cuatro pruebas, que consiste en un examen tipo test de gramática y terminología jurídica y económica. Se trata de un examen eliminatorio, por lo cual, los aspirantes que deseen presentarse a las siguientes pruebas han de aprobarlo. A continuación describimos las partes del examen al que han de someterse los solicitantes:

1. El primer ejercicio consiste en un examen tipo test de gramática y terminología jurídica.
2. El segundo ejercicio consiste en tres pruebas, siendo todas eliminatorias, de modo que los candidatos tendrán que superar cada una de ellas:
  - a) Traducción al castellano de un texto periodístico o literario sin poder utilizar el diccionario.

- b) Traducción del castellano a la lengua extranjera, sin diccionario.
  - c) Traducción de la lengua extranjera al castellano con diccionario, de un texto de carácter jurídico o económico.
3. El tercer ejercicio consiste en una prueba de carácter oral. Si comparamos la nueva convocatoria con la del año 2010, podemos comprobar que el último ejercicio comprende, además de una interpretación consecutiva de un texto sobre cualquier materia, un dialogo con el aspirante a fin de verificar la capacidad de comprensión y el dominio de la lengua extranjera.

#### **3.4.1.2. Reconocimiento de cualificaciones profesionales**

En virtud del Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, que incorpora la Directiva 89/48/CEE, los nacionales, tanto de la Unión Europea como de otros Estados en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, quienes hayan obtenido una formación superior mínima de tres años, análoga a la de España, podrán acceder al consiguiente reconocimiento en las mismas condiciones que los que poseen el título español (ATIJC, 1999). En lo que se refiere a la profesión de traductor-intérprete jurado, la orden de 23 de agosto de 1999 regula el sistema de convalidación de dicha profesión. Tal y como establece la orden:

El Ministerio de Asuntos Exteriores verificará la correspondencia entre la formación exigida en España a los Intérpretes Jurados y la sancionada por los títulos, certificados o diplomas obtenidos en otros Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo por ciudadanos de dichos países que pretendan ejercer en España dicha profesión regulada (O. 1999, de 23 de agosto)

El procedimiento se llevará a cabo mediante la presentación de la solicitud por parte del interesado en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), que una vez presentada se dirigirá al Secretario general técnico del MAEC.

La Oficina de Interpretación de Lenguas del MAEC se encargará de examinar la documentación aportada y en caso de que la solicitud fuese incompleta, se le podrá requerir al interesado que subsane la ausencia de documentación correspondiente en un plazo determinado. Igualmente, la OIL se reserva el derecho de solicitar el informe a

organismos y entidades correspondientes en caso de suscitarse dudas sobre dichos documentos (ATIJC, 1999).

El Secretario general técnico del MAEC adoptará la resolución en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de presentación de los documentos necesarios por parte del interesado. La resolución, según describe ATIJC, contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos: el reconocimiento del título, la exigencia de superación de una prueba de aptitud o de un período de prácticas y la desestimación de la solicitud.

La prueba de aptitud a la que podrá ser sometido el interesado consistirá en un examen sobre las cualificaciones profesionales del solicitante en base a la formación superior o experiencia laboral que no hayan sido cubiertas en el país de origen del mismo en calidad de traductor-intérprete jurado en España.

En caso de que el interesado se decantase por la realización de las prácticas, la Secretaria General del MAEC adaptará dichas prácticas a un programa específico bajo responsabilidad de un intérprete jurado, quien podrá ser elegido por el solicitante.

#### **3.4.1.3. Exención de examen por titulación universitaria**

A pesar de la supresión de la exención de examen para los licenciados en Traducción e Interpretación con la entrada en vigor del RD 2002/2009, con fecha de 23 de diciembre, dicha vía de acceso se aplicará hasta el 30 de septiembre de 2015. Como apunta Vigier (2010) en su investigación sobre la normativa del 2009, la presente vía de acceso ha recibido severas críticas mayoritariamente por parte de los profesionales, quienes sostienen que la Licenciatura en Traducción e Interpretación no permite a los estudiantes adquirir o desarrollar la competencia requerida para ser un TIJ. A su vez se ha observado un incremento innecesario de profesionales y saturación del mercado con la consecuente bajada de tarifas (Vigier, 2010: s.p.).

Con el Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, que modifica el artículo 15 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, se hace referencia a los licenciados en TI o profesionales poseyentes de un título extranjero homologado en lo que respecta a su nombramiento mediante la exención de examen, previsto en el artículo 14 del propio Real Decreto, siempre que acrediten, mediante su correspondiente certificación académica, la superación de las asignaturas de dicha licenciatura en la que los Licenciados hayan recibido “una preparación específica en traducción jurídica y

económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para la que se solicite el nombramiento” (RD 79/1996, de 26 de enero).

En virtud de lo expuesto anteriormente, la ORDEN AEX/1971/2002, de 12 de julio establece definitivamente que todos aquellos que desean obtener la exención de exámenes han de reunir los siguientes requisitos:

- Poseer la nacionalidad española o de país mimbros del EEE.
- La acreditación del aprobado en las asignaturas de la Licenciatura en Traducción e Interpretación o titulación extranjera debidamente homologada.
- Haber cursado 24 créditos en traducción jurídica o económica correspondientes a las asignaturas denominadas “Traducción Jurídica y Económica” o “Traducción Especializada”, y 16 créditos en interpretación de la lengua para la que se solicita el nombramiento. Dichos créditos en interpretación corresponderán a asignaturas troncales, obligatorias u optativas cursadas con la combinación lingüística B (primera lengua extranjera) y A (primera lengua: español).

La presentación de la solicitud del título de traductor-intérprete jurado ha de tramitarse en un plazo de un año de carácter improrrogable a partir de la fecha de finalización de los estudios.

### 3.5. Situación actual en el Reino Unido

En el presente apartado describimos la situación actual de la traducción jurada en el Reino Unido, apoyándonos en los datos que hemos encontrado en las páginas oficiales de las instituciones de traducción reconocidas por el gobierno británico y en el trabajo de Vigier (2010), quien nos proporciona la información acerca de los requisitos que debe cumplir una traducción oficial y el modo en que se ha de certificar. Asimismo, describiremos las vías de acceso a la profesión en lo que respecta a diferentes títulos y las pruebas que han de superar los candidatos para obtener los mismos.

En la actualidad, el Reino Unido cuenta con dos organizaciones principales de traductores e intérpretes a las que pueden dirigirse los ciudadanos, Chartered Institute of Linguists (CIOL) e Institute of Translation and Interpreting (ITI), “reconocidas por el gobierno y comprometidas en la tarea de dignificar la profesión y promover la calidad de los servicios de traducción e interpretación ofrecidos en el país” (Vigier, 2010:94). Sin embargo, los traductores no están obligados a pertenecer a ninguna de estas instituciones.

Como hemos comentado en el apartado *Concepto de traducción jurada*, la profesión de traductores-intérpretes en el Reino Unido no se encuentra claramente definida, es decir, no existe un traductor-intérprete jurado (*sworn* o *notarized translator*) nombrado por el gobierno británico para llevar a cabo traducciones oficiales. Pese a la instauración del Registro Nacional de Intérpretes para los Servicios Públicos (NRPSI), especializado exclusivamente en la interpretación jurídica y judicial, y la creación del título DPSI, no encontramos ninguna titulación o acreditación equivalente que proporcione una cualificación en el sector de la traducción oficial (Vigier, 2010). En numerosas ocasiones no solo se requiere una traducción de determinados documentos, sino también la certificación o legalización de éstos. Como hemos mencionado al principio, cualquier traductor puede certificar una traducción con su firma y sello, el cual se obtiene mediante el pago al ITI: “un organismo cuyos miembros pueden certificar traducciones” (Vigier, 2010:95).

En lo que se refiere a tipos de traducciones oficiales, en el Reino Unido encontramos *autocertificación* (*self-certification*) y *traducción notariada* (*sworn translation*). La *autocertificación*, según explica Vigier (2010), presenta un grado de oficialidad menor que la *sworn translation* y se acepta en instituciones como Ministerio de Interior o la

Oficina de Pasaportes, además de encontrarla en numerosas embajadas y empresas privadas. La *traducción notariada* normalmente se lleva a cabo cuando así lo requieren las autoridades británicas y supone un coste más elevado que la *autocertificación*.

En cuanto a la certificación de la traducción, ésta se realizará de siguiente modo:

- La traducción se entregará en papel con el membrete del traductor.
- El sello ha de encontrarse en la primera página de la traducción junto al nombre y firma del traductor.
- La traducción se revisará por un miembro del ITI.
- La Traducción se coserá junto con la copia del original y cada página llevara la firma o los iniciales del traductor.
- A continuación el ITI propone una fórmula de certificación:

I, the undersigned, [name], Member of the Institute of Translation and Interpreting, [other qualifications], declare that the translation of the attached documents [identifying particulars] is to the best of my knowledge and belief a true and faithful rendering of the original [language], done to the best of my ability as a professional translator [and verified by [Name and ITI membership qualification]]
---

### **3.5.1. Vías de acceso a la profesión del traductor-intérprete Jurado en Reino Unido**

En este subapartado exponemos la información más relevante acerca de los títulos que consideramos que más se asemejan a los de un TIJ, atendiendo al contenido del examen y al coste que tendrían que abonar los aspirantes que deseen participar en estas pruebas.

#### **3.5.1.1. *Diploma in Translation* (DipTrans)**

*Diploma in Translation* (DipTrans) hace referencia a “una cualificación de posgrado, principalmente concebida para traductores profesionales o aquellas personas que cuentan con avanzados conocimientos lingüísticos y que desean emprender una carrera profesional en el ámbito de la traducción” (Ordoñez, 2009:73).

El objetivo del DipTrans, según expone Vigier (2010), consiste en llevar a cabo una evaluación de la capacidad de los solicitantes para realizar traducciones a la lengua meta. Aunque el CIOL no exige a los candidatos poseer ningún título específico, se



recomienda haber cursado estudios universitarios en el campo lingüístico. En cuanto al examen, éste se celebra cada año en el mes de enero y comprende tres unidades:

1. Traducción general: los candidatos disponen de tres horas para traducir un texto de carácter general de unas 600 palabras. El precio de este examen es de 400 libras.
2. Traducción semiespecializada: consiste en una traducción de carácter semiespecializado (técnico, económico o literario) de 450 palabras aproximadamente. El coste de este examen es de 298 libras.
3. Traducción semiespecializada: los aspirantes deberán traducir un texto semiespecializado (científico, de ciencias sociales y legal) con una extensión de unas 450 palabras. El último examen, al igual que el anterior, tendrá un coste de 298 libras.

Los candidatos podrán someterse a cada prueba por separado o bien a los tres exámenes de forma continuada, que cuestan 595 libras (alrededor de 820 euros). Para obtener el diploma es necesario aprobar las tres unidades. Los aspirantes tienen derecho a utilizar cualquier tipo de material de consulta impreso en papel.

En lo que respecta a los criterios de evaluación, éstos se organizan en tres categorías:

1. Comprensión, precisión y exactitud.
2. Gramática, cohesión, coherencia y organización.
3. Aspectos técnicos: ortografía, puntuación, traducción de nombres propios, etc.

El tribunal examinador, según Ducroquet (2005:63, citado en Vigier, 2010:102), estará compuesto por traductores en activo o docentes universitarios, aunque en lo que respecta a la calificación de los exámenes, ésta se realizará por nativos de la lengua que se examina.

### **3.5.1.2. *Diploma in Public Service Interpreting (DPSI)***

El DPSI permite a los aspirantes ejercer en el ámbito de la interpretación pública y corresponde a un *Bachelor Degree*. El objetivo principal, según el CIOL, es proporcionar un nivel profesional en interpretación pública en los campos de derecho, tanto inglés como escocés, sanidad y gobierno local. Los candidatos se examinarán de la lengua inglesa en combinación con otra, a elegir por éstos, y sobre uno de los campos mencionados anteriormente. El examen se puede realizar en 52 lenguas diferentes según la demanda.

El examen se compone de cinco partes:

1. Interpretación consecutiva y simultánea (susurrada) sobre un campo determinado (220 libras). La primera prueba tendrá una duración de 30 minutos y no se podrán utilizar diccionarios ni glosarios.
2. Traducción a vista al inglés (180 libras) con una duración aproximada de 10 minutos. No se permite el uso de diccionarios ni de notas.
3. Traducción a vista a la otra lengua (180 libras) de duración aproximada de 10 minutos. No se permite el uso de diccionarios ni de notas.
4. Traducción escrita al inglés de un texto de unas 250 palabras de una hora de duración (180 libras). Se permite el uso de diccionarios y glosarios impresos.
5. Traducción escrita a la otra lengua de un texto de unas 250 palabras de una hora de duración (180 libras). Se permite el uso de diccionarios y glosarios en formato de papel.

Los candidatos podrán examinarse de alguna de las partes o bien de todas las partes juntas. En este último caso, el coste del examen será de 660 libras (alrededor de 900 euros). Para obtener el título, los aspirantes han de aprobar las cinco partes. Aquellos que lo consigan, podrán solicitar su ingreso en el NRPSI.

En lo que respecta al sistema de convalidaciones de títulos extranjeros, según apunta Vigier (2010), éste no existe en el NRPSI. Sin embargo, esto no significa que en caso de que se produjera la solicitud del reconocimiento de un título de interpretación, ésta se rechazase automáticamente; el comité del NRPSI llevará a cabo una investigación de la profesión y su correspondiente sistema de acceso para comprobar si las áreas para las que se examinan los intérpretes en el NRPSI se corresponden con las del país de origen (Vigier, 2010).

## 4. Conclusiones

En el presente apartado, en función de los resultados obtenidos en este estudio, presentaremos las conclusiones. Además, explicaremos la relación de nuestro trabajo con los conocimientos adquiridos en la carrera y nuestras expectativas de futuro.

### 4.1. Resultados obtenidos

Después de analizar la situación del traductor jurado en España y en el Reino Unido, hemos encontrado tanto diferencias como similitudes. En la primera fase de investigación, nos ha llamado la atención la escasez bibliográfica en lo que respecta a la evolución histórica en el Reino Unido. Si bien España cuenta con una larga historia de traducción jurada, que se originó con motivo de favorecer la comunicación con los indígenas del Nuevo Mundo, y que ha evolucionado a través de diversas normativas, el Reino Unido, al parecer, no ha regulado la traducción jurada mediante la legislación. A pesar de esta evidente falta de definición por parte del gobierno británico, la traducción jurada, conocida como *sworn translation*, constituye un ámbito muy importante en el país. Cabe resaltar, además, las diferencias entre ambos conceptos. En España, la traducción jurada, como hemos podido comprobar, hace referencia a una traducción de carácter oficial llevada a cabo por un TIJ, quien, tras superar un examen, recibe el nombramiento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; en el Reino Unido, cualquier traductor puede certificar una traducción que, por tanto, pasaría a ser considerada una *sworn translation*. Resulta llamativo el hecho de que exista el concepto de traducción jurada o *sworn translation* en el Reino Unido, pero que no exista un *sworn translator* o persona autorizada por el gobierno británico para realizar esta labor. El gobierno británico acepta las traducciones certificadas (*self-certified translation*) por los propios traductores, y solo requerirá traducciones legalizadas ante un notario o abogado cuando lo considere oportuno.

La profesión del TIJ en España tampoco se encuentra claramente regulada. La normativa no establece con claridad el ámbito de actuación de los traductores-intérpretes jurados, se limita exclusivamente a regular el acceso a la profesión y las formalidades que debe cumplir una traducción jurada.

En cuanto a las vías de acceso, comprobamos que el sistema español cuenta con tres posibilidades de obtener el título de traductor jurado. Aunque en el Reino Unido no se

requiere disponer de un título específico para llevar a cabo las traducciones oficiales, encontramos dos diplomas que, a nuestro criterio, se asemejarían considerablemente al título del TIJ: *Diploma in Public Service Interpreting* (DPSI) y *Diploma in Translation* (DipTrans). El DPSI permite acceder al Registro Nacional de Intérpretes para los Servicios Públicos (NRPSI), cuyo objetivo, según Vigier (2010), es proporcionar a las agencias y organizaciones, que se encargan de prestar servicios públicos en el país, intérpretes profesionales cualificados; y DipTrans, es un reconocimiento profesional que goza de mucho prestigio, pero no es un requisito para la práctica de la traducción jurada. A diferencia del título español que permite realizar, además de las traducciones, también interpretaciones juradas, el DipTrans solo se limita a la traducción escrita. El DPSI, por su parte, se centra más en la interpretación, aunque también abarca la traducción general. La principal ventaja del sistema español en comparación con el británico es el hecho de que todos los traductores-intérpretes jurados han de someterse a una serie de pruebas para obtener el nombramiento como TIJ, salvo en los casos en los que se contempla la exención de examen, lo cual garantizaría una mayor calidad en la labor de la traducción jurada.

Con respecto al examen, los aspirantes que deseen obtener el nombramiento de TIJ por el MAEC, se someterán a una prueba que consiste en determinar el conocimiento sobre el campo jurídico y económico, mientras que en el DipTrans los candidatos no están obligados a someterse a una prueba semejante de carácter jurídico y económico, y pueden elegir, por lo tanto, el ámbito sobre el que deseen examinarse. En lo concerniente a la interpretación jurada, tras analizar los ejercicios del examen, comprobamos que el DPSI no evalúa la capacidad de los solicitantes para interpretar textos jurídicos o económicos, de modo que no se puede garantizar que los intérpretes que poseen este título estén capacitados para llevar a cabo una interpretación de textos jurídicos y económicos. En España observamos una situación similar en cuanto al examen de interpretación consecutiva: como hemos expuesto antes, la evaluación se limita a la competencia lingüística de los candidatos, sin tratar cuestiones del ámbito jurídico. Además, a diferencia de la traducción jurada, que puede ser realizada solamente por el traductor jurado, la interpretación jurada puede llevarse a cabo por cualquiera que tenga el conocimiento de la lengua, es decir, no se obliga a contratar a un intérprete jurado para realizar una interpretación jurada.

Tras lo expuesto, podríamos afirmar que la figura del traductor-intérprete jurado no se encuentra claramente definida en ninguno de los dos países. Aunque la falta de regulación en el Reino Unido es mucho más grave que en España, pues el ejercicio profesional del traductor jurado y las vías de acceso al mismo parecen carecer de importancia en el ámbito británico.

Por último, como muestran los datos analizados en el presente trabajo, podemos concluir que no existe una equivalencia total en la figura del traductor-intérprete jurado en España y el Reino Unido; esta falta de paralelismo se debe en gran medida a las diferencias existentes en el sistema legislativo, marco cultural y la evolución histórica.

#### **4.2. Relación del trabajo con los conocimientos adquiridos en la carrera e intereses futuros**

Entre las asignaturas que más nos han ayudado a realizar este estudio destaca la *Traducción Jurídica y Económica*, que nos ha proporcionado la información básica acerca de las cuestiones como, ¿en qué consiste una traducción jurada?, ¿cómo se lleva a cabo? o ¿quién puede realizarla?, que han sido fundamentales en el planteamiento de este trabajo. Además, en las clases hemos tenido la oportunidad de trabajar con documentos reales, que habían sido objeto de traducciones juradas, facilitados por nuestra profesora.

Para finalizar, nos gustaría comentar algunas líneas de investigación futuras a través de las cuales contemplamos la posibilidad de seguir desarrollando el presente trabajo en el futuro. Una de ellas sería el estudio de la figura del traductor-intérprete jurado en el Reino Unido, con el fin de llevar a cabo una investigación más detallada de la misma. También sería muy interesante entrevistar a traductores-intérpretes jurados y realizar un estudio empírico de los documentos y géneros que son objeto de traducción jurada con más frecuencia en el Reino Unido.

## 5. Bibliografía

### 5.1. Artículos y publicaciones disponibles en internet

- BORJA ALBI, A. (2012). Aproximación traductológica a los textos médico-jurídicos. *Panacea*, 13 (36), 167-175. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de [http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-tradyterm\\_ABorjaAlbi.pdf](http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n36-tradyterm_ABorjaAlbi.pdf)
- La traducción jurídica: didáctica y aspectos textuales. *Centro Virtual Cervantes*, s.p. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de <http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/borja.htm>
- BORJA ALBI, A., GARCÍA IZQUIERDO, I. y MONTALT, V. (2009). Research Methodology in Specialized Genres for Translation Purposes. *GENTT* (Géneros Textuales para la Traducción). Recuperado el 23 de mayo de 2015 de <http://www.gentt.uji.es/?q=es/investigaci%C3%B3n>
- CÁCERES WÜRSIG, I. y PÉREZ GONZÁLEZ, L. (2003). Antecedentes históricos y proyección futura de la figura del intérprete jurado en España. *Hermeneus*, (5), 1-17. Recuperado el 23 de mayo de 2015 de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=809500>
- LOBATO PATRICIO, J. (2009). La traducción jurídica, judicial y jurada: vías de comunicación con las administraciones. *Entreculturas* (1), 191-206. Recuperado el 5 de mayo de 2015 de <http://www.entreculturas.uma.es/n1pdf/articulo10.pdf>
- MAYORAL, R. (1999). Las fidelidades del traductor jurado: batalla indecisa. Universidad de Granada. Recuperado el 5 de mayo de 2015 de [http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Fidelidades\\_.pdf](http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Fidelidades_.pdf)
- (1999). Traducción oficial (jurada) y funciones. Traducir para la justicia, Manuel C. Feria ed. Granada: Comares, 59-86. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de [http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Funciones\\_.pdf](http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Funciones_.pdf)
- ORDÓÑEZ LÓPEZ, P. (2009). La evaluación de traductores e intérpretes jurados. Revisión teórica y análisis del tratamiento informativo de los candidatos a pruebas de acreditación y selección. *Íkala, revista de lenguaje y cultura*, 14, (21), 59-81. Recuperado el 23 de mayo de 2015 de <http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/23644>
- PEÑARROJA FA, J. (2004). Historia de los intérpretes jurados. *Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña*. Recuperado el 10 de abril de 2015 de <http://atijc.com/es/historia.htm>
- PHILLIPS, M. (1999). La profesión del traductor e intérprete autónomo: aspectos técnicos. Centro Virtual Cervantes. Recuperado el 30 de abril de 2015 de <http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/phillips.htm>
- VARGAS GIRALDO, A. (2013). *La Traducción Jurada en España y Alemania: un enfoque comparativo*. (Trabajo de fin de grado, Universidad de

Salamanca). Recuperado el 20 de mayo de <http://www.avgiraldo.com/Servicios de Traduccion/Mas files/TFG-def.pdf>

VIGIER MORENO, Francisco Javier (2010). *El nombramiento de Traductores-Intérpretes Jurados de inglés mediante acreditación académica: descripción de la formación específica y del grado de satisfacción de los egresados*. (Tesis doctoral, Universidad de Granada). Recuperado el 10 de mayo de 2015 <http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/5658/1/18896753.pdf>

— (2010). La nueva normativa de la profesión de Traductor-Intérprete Jurado: ¿un paso adelante o un paso atrás? *La linterna del traductor*, (4), 37-50. Recuperado el 10 de mayo de 2015 de [http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna\\_n4.pdf](http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n4.pdf)

## 5.2. Materiales legales y otros recursos en línea

Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña (ATIJC). *Convalidación comunitaria – UE*. Recuperado el 5 de mayo de 2015 de <http://atijc.com/es/convalid.htm>

Chartered Institute of Linguists. Recuperado el 18 de mayo de 2015 de <https://www.ciol.org.uk/>

España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. ORDEN AEX/1971/2002, de 12 de julio, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los Licenciados en Traducción e Interpretación. *Boletín Oficial del Estado*, 2 de agosto de 2002, núm. 184, pp. 28596-28597. Recuperado el 3 de mayo de 2015 de <http://www.boe.es/boe/dias/2002/08/02/pdfs/A28596-28597.pdf>

España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Resolución de 19 de enero de 2015, de la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado. *Boletín Oficial del Estado*, 27 de enero de 2015, núm. 23, pp. 6217-6220. Recuperado el 1 de mayo de 2015 de <http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/27/pdfs/BOE-A-2015-692.pdf>

España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se convocan exámenes para nombramiento de Traductores-Intérpretes Jurados. *Boletín Oficial del Estado*, 14 de octubre de 2010, núm. 249, pp. 86841-86847. Recuperado el 1 de mayo de 2015 de <http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/14/pdfs/BOE-A-2010-15691.pdf>

España. Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. *Boletín Oficial del Estado*, 26 de diciembre de 2003, núm. 309, pp. 46025-46096. Recuperado el 20 de abril de 2015 de <http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/26/pdfs/A46025-46096.pdf>

España. Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

- Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. *Boletín Oficial del Estado*, 28 de abril de 2015, núm. 101, pp. 36559-36568. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de <http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4605.pdf>
- España. Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado. *Boletín Oficial del Estado*, 15 de noviembre de 2014, núm. 277, pp. 93877-93884. Recuperado el 15 de abril de 2015 de <https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/15/pdfs/BOE-A-2014-11801.pdf>
- España. Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración. *Boletín Oficial del Estado*, 22 de noviembre de 1991, núm. 280, pp. 37916-37919. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de <http://www.boe.es/boe/dias/1991/11/22/pdfs/A37916-37919.pdf>
- España. Real Decreto 2555/1977 de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. *Boletín Oficial del Estado*, 8 de octubre de 1977, núm. 241, pp. 1-5. Recuperado el 20 de abril de 2015 de <http://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-24564-consolidado.pdf>
- España. Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, por el que se modifican diversos artículos del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. *Boletín Oficial del Estado*, 23 de febrero de 1996, núm. 47, pp. 6875-6876. Recuperado el 30 de abril de 2015 de <http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/23/pdfs/A06875-06876.pdf>
- España. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. *Boletín Oficial del Estado*, 17 de septiembre de 1882, núm. 260, pp. 1-195. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de <https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf>
- Institute of Translation and Interpreting. Recuperado el 23 de mayo de 2015 de <http://www.iti.org.uk/about-industry/certification-sworn>
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. *Traducción e Interpretación: examen, reconocimiento y exención*. Recuperado el 20 de abril de 2015 de <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/traduccioninterpretacion/Paginas/Examen.aspx>
- National Register of Public Service Interpreters. Recuperado el 18 de mayo de 2015 de <http://www.nrpsi.org.uk/>



The Crown Prosecution Service. *The National Agreement on the arrangements for the use of Interpreters*. Recuperado el 5 de mayo de 2015, de [http://www.cps.gov.uk/legal/h\\_to\\_k/interpreters/#a02](http://www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/interpreters/#a02)

## 6. Anexos

### 6.1. Modelos de examen para obtener el nombramiento de traductor-intérprete jurado en España

#### **PRIMER EJERCICIO (2015)**

#### **Modelo de examen tipo test de gramática y terminología jurídica**

#### **Ejemplo de preguntas de gramática:**

**1. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?:**

- a) Paco el herrero, no aspiraba a que su hijo progresaría.
- b) Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase.
- c) Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progrese.
- d) Paco el herrero, no aspiraba a que su hijo hubiera progresado.

**2. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?:**

- a) Hacía unos meses que habían hecho a don Ramón el alcalde.
- b) Hacía unos meses que habían hecho a don Ramón un alcalde.
- c) Hacía unos meses que habían hecho don Ramón alcalde.
- d) Hacía unos meses que habían hecho a don Ramón alcalde.

**3. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?:**

- a) El hombre el cual vino te dejó esta carta.
- b) El hombre que vino te dejó esta carta.
- c) El hombre el cual vino, te dejó esta carta.
- d) El hombre quien vino, te dejó esta carta.

**4. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?:**

- a) Los oriundos de Huelva se denominan onuvenses.
- b) Los oriundos de Huelva se denominan onubenses.
- c) Los oriundos de Huelva se denominan honuvenses.
- d) Los oriundos de Huelva se denominan honubenses.

**5. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?:**

- a) Pedro muy nervioso no hacía más que moverse de un lado para otro.
- b) Pedro muy nervioso, no hacía más que moverse de un lado para otro.
- c) Pedro, muy nervioso, no hacía más que moverse de un lado para otro.
- d) Pedro muy nervioso, no hacía más de que moverse de un lado para otro.

**6. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?:**

- a) Supuestamente que está en la casa.
- b) Supuestamente está en la casa.
- c) Supuestamente esté en la casa.
- d) Supuestamente que esté en la casa.

#### **Ejemplo de preguntas de terminología jurídica:**

**30. ¿Cuál es la expresión correcta en la organización judicial española?**

- a) Sala de lo Penal
- b) Sala de Cuestiones Penales
- c) Sala de Materias Criminales
- d) Sala de Delitos y Faltas

**31. La Ley que regula actualmente el desarrollo de los procedimientos civiles en España se denomina:**

- a) Ley de Procedimiento Civil
- b) Ley de Enjuiciamiento Civil
- c) Ley de Casos Civiles
- d) Ley de los Tribunales Civiles

**32. ¿Cuál de estas expresiones es incorrecta?**

- a) presentar un recurso
- b) izar un recurso
- c) interponer un recurso
- d) elevar un recurso

**33. La persona que presenta físicamente el escrito de demanda en el Registro es:**

- a) el fiscal
- b) el procurador
- c) el secretario judicial
- d) el juez de paz

**34. Un dictamen pericial es:**

- a) un catálogo de opciones
- b) una advertencia de futuros problemas
- c) una recomendación de actuación
- d) una opinión profesional

**35. ¿Qué significa el término “órgano jurisdiccional”?**

- a) un juzgado o tribunal
- b) un organismo policial
- c) un tribunal de arbitraje
- d) un órgano administrativo

**36. La resolución de un tribunal de arbitraje en España se denomina:**

- a) sentencia
- b) opinión
- c) auto
- d) laudo

## **SEGUNDO EJERCICIO (2010)**

**Primera prueba: traducción al castellano de un texto periodístico. Sin diccionario**

### **Canada's criminal-justice policy**

#### **Prisoners of politics - Less crime, more punishment**

FEW political promises are such tried and trusted crowd pleasers as the vow to get tough on crime. But what is a politician to do when the crime rate is at a 30-year low and both the rate and the severity of reported crime has been dropping? If you are Stephen Harper, Canada's prime minister, you pledge to keep "law-abiding Canadians and their families" safe, and introduce a series of bills that will put more people in prison for longer and make it harder for convicts to win early release.

Fighting crime has been a priority for Mr Harper's minority government ever since the Conservatives defeated the Liberals in 2006. A third of the 63 bills introduced in the House of Commons in the past year have dealt with some aspect of criminal justice, and more are on their way. Despite complaints that a similar, purely punitive approach has not worked in the United States, and that piecemeal change will clog up the justice system and leave taxpayers with a larger bill, the government has not deviated. Normally, a minority government might expect to be held in check by opposition in the House of Commons. The opposition parties all disapprove of the Conservatives' approach. But none wants to be seen as soft on crime. Liberal senators, who still control the upper house, have shown a bit more backbone, proposing amendments, only to give in when slammed for being an appointed body thwarting the will of an elected one.

The new legislation includes a measure to end the practice of crediting those serving jail terms with two days remission for every day spent in custody while awaiting trial or sentencing. This was introduced when judges recognised that lengthy delays between arrest and trial were confining those unable to post bail in remand centres, where conditions are much harsher than in prison.

Each of the 13,000 inmates in federal prisons costs the government C\$93,000 a year. Another 22,000 prisoners are in provincial jails, serving shorter sentences or on remand. The government acknowledges that its crime bills, which also include some new offences, new mandatory minimum sentences and an end to house arrests, will cause the number of federal inmates to rise. By how much is unclear. The estimates are "cabinet confidences", says Peter Van Loan, the public safety minister who is in charge of prisons.

The Economist

## **Segunda prueba: traducción a la lengua extranjera. Sin diccionario.**

Según la Comisión Europea, se definen como pobres o socialmente excluidos aquellas personas que no tienen una participación plena en la vida económica, social y civil o cuyos recursos son inadecuados y les impiden disfrutar de un nivel de vida y de una calidad considerada aceptable por la sociedad en la que viven. Puesto que es posible ser pobre y participar activamente en la sociedad, así como estar excluido sin ser pobre, se plantean tanto en los estudios como en los programas y políticas la dificultad de establecer una definición y un método para medir la pobreza y la exclusión social. El problema es más complejo cuando el objeto de análisis es la infancia. Se ha hablado del "ambiguo papel de los niños", dado que son dependientes de los recursos que sus familias les dedican y al mismo tiempo son individuos independientes con derecho a la participación social en todas las facetas de la vida.

Si mantenemos la definición ya dada, se ha especificado que las situaciones de pobreza pueden acarrear múltiples desventajas con respecto al desempleo, bajos ingresos, escasos equipamientos, atención sanitaria deficiente y barreras a la formación, a la cultura, al deporte o el ocio. La exclusión social supone un paso más con respecto a la pobreza, adentrándose en un proceso en el que ciertos individuos son colocados en los márgenes de la sociedad, lo que les distancia aún más del trabajo, los ingresos medios, la educación y las posibilidades de formación, así como de las redes comunitarias y las actividades sociales, circunstancia que les ocasiona un sentimiento de incapacidad de controlar su vida diaria.

Si observamos la evolución de la definición de pobreza y el interés mostrado por las instituciones comunitarias en trabajar para conseguir su fin, llama la atención que ante las dimensiones del problema de la pobreza infantil y la importancia de sus consecuencias futuras, la Unión Europea no haya establecido una buena red jurídica de protección y haya "desatendido" a este colectivo en sus programas y estrategias. Hay que destacar la escasa financiación - y el mal reparto que en ocasiones se hace de ella - con que cuentan los programas destinados a reducir la pobreza infantil.

*Cristina García Nicolás*  
*Márgenes sociales en Europa: la pobreza infantil*

### **Tercera prueba: traducción al castellano de un texto de carácter jurídico. Con diccionario**

#### **Damages for breaches of privacy**

A misrepresentation is 'fraudulent' if it is made with the knowledge or in the belief that it is false. As a general rule, the maker of a fraudulent misrepresentation is potentially liable to everyone who he intends or expects to rely on that misrepresentation for any pecuniary loss they might suffer as a result. Furthermore, a party who makes a fraudulent misrepresentation to another could be liable to a third party if the tortfeasor intends or expects that his misrepresentation would be repeated to and acted upon by the third party.

In the context of the safe harbor the relevant misrepresentation is the organization's public declaration that it will adhere to the safe harbor principles. Having made such a commitment, a conscious failure to abide by the principles could be grounds for a course for action for misrepresentation by those who relied on the misrepresentation.

Those who rely on a fraudulent misrepresentation have a right to recover damages. Allowable damages include actual out-of-pocket loss as well as the lost 'benefit of the bargain', in a commercial transaction. Whereas fraudulent misrepresentation requires either actual knowledge or at least the belief that the misrepresentation is false, liability can also attach for negligent misrepresentation. In a recent case, for example, the Superior Court of Connecticut held that a failure by an electric utility to disclose its reporting of customer payment information to national credit agencies sustained a cause of action for misrepresentation. In that case, the plaintiff was denied credit because the defendant reported payments not received within thirty days as 'late'. The plaintiff alleged that he had not been informed of this policy when he opened a residential service account with the defendant. The court specifically held that "a claim for negligent misrepresentation may be based on the defendant's failure to speak, when he has a duty to do so". This case also shows that "scienter" or fraudulent intent is not a necessary element in such a cause of action.

Insofar as a violation of the safe harbour principles entailed a misuse of personal information, it could also support a claim by the data subject for the common law tort of invasion of privacy. In a 1905 case, the Georgia Supreme Court found a right to privacy rooted in natural law and common law precepts in holding for a private citizen whose photograph had been used by a life insurance company without his consent or knowledge to illustrate a commercial advertisement. Articulating now-familiar themes in American privacy jurisprudence the court found that the usage of the photograph was 'malicious', 'false' and tended to 'bring plaintiff into ridicule before the world'.  
Memorandum from the U.S. Chief Counsel for International Commerce

## 6.2. Modelos de examen para obtener el *Diploma in Translation* en el Reino Unido

### Traducción de carácter general (2006)

#### **PAPER 1: GENERAL TRANSLATION**

For information only, not to be translated: The following text has been taken from an article by Lucy Ward, social affairs correspondent, published in The Guardian in July 2005. You have been asked to translate this passage for publication in a quality newspaper in your target language.

**Study finds days of the desk are numbered**  
**Report on future of work predicts a move away from office life**  
**TRANSLATION TO BEGIN HERE:**

**The office desk, as we know it, may have had its day.**

A large study on the future of work in the UK predicts the rise of the "mobile worker" moving - laptop and mobile in tow - between office, home, hotel, airport lounge or motorway service station as the needs of a job demand.

Today, more than 5 million people, almost a fifth of employees, already spend some time working at home or on the move, according to the report published by the Economic and Social Research Council and the Tomorrow Project, a charity studying future trends. That number will shoot up over the coming decades, the researchers say, with mobile work becoming one of the fastest-growing types of employment.

"Individuals will not necessarily see themselves as working from home," according to the study, *Working in the Twenty-First Century*, extra copies of which have been ordered by Tony Blair's office in Downing Street. "They could equally be working from the office. But they will be on the move from place to place, working at various times of the day, for much of the week. For a substantial proportion of workers, work in 20 years' time will be more about movement than staying put."

The rise of the mobile worker, and the continuing development of home working, has significant implications. While the office itself will not disappear, despite many predictions of its demise, "mobile work and home working will involve a shift from personalised space to personalised time," the study concludes.

Rooms or desks belonging to an individual and often personalised with photographs and plants will, it forecasts, increasingly be replaced by "the collective office" in which employees will "hot desk" on anonymous work stations.

For workers, this loss of personal space will be offset by greater control of time, allowing them to use technology to work late in a hotel while on the road, the study argues.

But it concedes that managing time will be an issue for this growing section of the workforce, with the boundaries of work and leisure time becoming less distinct, potentially adding to family conflict. "Once work weaves into all the nooks and crannies of your life, deciding when to work will be increasingly difficult. Getting the

job done will compete with the family."

The report warns: "The job will intrude on moments of personal reflection. Whatever the statutory limit on working hours, fluid time will help work to burrow into more of your time." Managers of mobile workers will find new ways to "control" staff, it adds.

### **The office worker**

Julie Babbs, 47, an accounts and administration manager: "I've got my own little space at my desk; my own little home. I've got a photo of my children. Then I have a pen by my phone that's just for show: it's a pink fluffy emu. I work here 9am to 5.30pm, five days a week. Mobile working or home working wouldn't be for me. I wouldn't want to be stuck at home all day, and I wouldn't want to be living out of a suitcase."

### **The mobile worker**

Caroline Woolley, 31, is an accountant:

"I'll often work in a cab, or on a train or at the airport - all dead time which saves me time," she says. "But it wouldn't be true to say having this technology makes me work 45 for far longer than before. A few weeks ago I was waiting for a document, but I went to a friend's birthday party and checked email from there. They didn't know I was in a bar, and it meant I could get on with my plans. I also have two mobiles, one for work and a personal one which goes on at night. With any of these things, you can still turn them off."



**Traducción de carácter semiespecializado: legal (2006)**

**PAPER 3F: LAW**

*For information only, not to be translated: The following text consists of extracts from the speech made in December 2004 by Lord Hoffman, member of the Appellate Committee of the House of Lords, which concerned the question whether the indefinite detention, on suspicion and without trial, of nine foreign citizens in Belmarsh Prison and Broadmoor Hospital, under the Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001, was compatible with the human rights of persons in the United Kingdom. Translate for an article to appear in an international journal on human rights.*

**TRANSLATION TO BEGIN HERE:**

My Lords,

86. I have had the advantage of reading in draft the speech of my noble and learned friend Lord Bingham of Cornhill and I gratefully adopt his statement of the background to this case and the issues which it raises. This is one of the most important cases which the House has had to decide in recent years. It calls into question the very existence of an ancient liberty of which this country has until now been very proud: freedom from arbitrary arrest and detention. The power which the Home Secretary seeks to uphold is a power to detain people indefinitely without charge or trial. Nothing could be more antithetical to the instincts and traditions of the people of the United Kingdom.

87. At present, the power cannot be exercised against citizens of this country. First, it applies only to foreigners whom the Home Secretary would otherwise be able to deport. ...Secondly, it requires that the Home Secretary should reasonably suspect the foreigners of a variety of activities or attitudes in connection with terrorism... If... the suspect is detained, his detention must be reviewed by the Special Immigration Appeals Commission. They can decide that there were no reasonable grounds for the Home Secretary's suspicion. But the suspect is not entitled to be told the grounds upon which he has been suspected. So he may not find it easy to explain that the suspicion is groundless. In any case, suspicion of being a supporter is one thing and proof of wrongdoing is another. Someone who has never committed any offence and has no intention of doing anything wrong may be reasonably suspected of being a supporter on the basis of some heated remarks overheard in a pub. The question in this case is whether the United Kingdom should be a country in which the police can come to such a person's house and take him away to be detained indefinitely without trial.

88. The technical issue in this appeal is whether such a power can be justified on the ground that there exists a "war or other public emergency threatening the life of the nation" within the meaning of article 15 of the European Convention on Human Rights... 30 97. ...In my opinion, such a power in any form is not compatible with our constitution. The real threat to the life of the nation, in the sense of a people living in accordance with its traditional laws and political values, comes not from terrorism but from laws such as these. That is the true measure of what terrorism may achieve. It is for Parliament to decide whether to give the terrorists such a victory.

### 6.3. Modelos de examen para obtener el *Diploma in Public Service Interpreting* en el Reino Unido

#### Interpretación consecutiva y simultánea de carácter legal (2013)

**IoLET Level 6 Diploma in Public Service Interpreting (QCF) 501/1250/8  
POLISH/ENGLISH LAW JUNE 2013**

**Unit 01: Interpret Consecutively and Simultaneously (Whispered) in the Public Services Context of English Law (K/602/2328)**

**2nd Scenario (Part B)**

**(Gender for personal pronouns to be chosen as appropriate)**

#### **ENGLISH-SPEAKING LEGAL ADVISOR'S PROMPT NOTES**

##### **CONTEXT:**

You are a legal advisor working in a publicly funded legal advice centre meeting with a Polish-speaking member of the public regarding access to information held by the UK Border Agency on the status of asylum applications.

#### **POLISH-SPEAKING MEMBER OF THE PUBLIC'S PROMPT NOTES**

##### **CONTEXT:**

You are a Polish-speaking member of the public who is meeting with a legal advisor from a publicly funded legal advice centre regarding access to information held by the UK Border Agency on the status of asylum applications.

#### **CONSECUTIVE INTERPRETING**

**I. Legal Advisor**

Hello.

##### **1. Klient(ka)**

Dzień dobry. Przyszedłem/Przyszedłam po poradę. // Umówiłem/-am się na spotkanie i powiedziano mi, że mam przyjść o tej porze. // Czy jest Pan/-i osobą, z którą miałem/-am się spotkać?

##### **II. Legal Advisor**

Yes, I am an advisor with the legal centre. // My colleague advised me you were an asylum seeker and had a few questions. Is that correct?

##### **2. Klient(ka)**

Nie, to się nie zgadza. Jestem tutaj w imieniu mojego partnera/ mojej partnerki, który/-a ubiega się o azyl. Ja nie jestem azylantem/ azylantką // Chcę się dowiedzieć, co się dzieje z wnioskiem mojego partnera/ mojej partnerki, ponieważ w tej chwili nie są mu/ jej udzielane żadne informacje. // Wydaje mi się, że Agencja Ochrony Granic Wielkiej Brytanii zataja informacje na temat tego, co się dzieje. // Czekamy już całą wieczność na jakąś wiadomość.

##### **III. Legal Advisor**

I understand your situation. Applications can often take a very long time. // It is not easy, but often the only thing you can do is be patient.

**3. Klient(ka)**

Byliśmy cierpliwi i mamy już tego dosyć! Chcę dostać jakieś odpowiedzi. // Słyszałem/-am, że można poprosić rząd o informacje i że musi ich wtedy udzielić. // Czy to prawda?

**IV. Legal Advisor**

Well, there are certain laws regarding when and what information an individual can request. // It is sometimes possible to request information from a public body.

**4. Klient(ka)**

Słyszałem/-am, że w Wielkiej Brytanii jest coś takiego jak wolność informacji. // Cóż, oni jakoś wcale nie korzystają z tej wolności, jeżeli chodzi o przekazywanie nam informacji na temat statusu wniosku o azyl mojego partnera/ mojej partnerki. // Czy istnieje jakiś przepis, zgodnie z którym muszą udzielić tych informacji?